



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE TUNJA**

**FECHA:** Siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)  
**REFERENCIA:** Proceso ejecutivo laboral de U.I. N° 2022- 00078-00.  
**EJECUTANTE:** Diego Alejandro Solano Vargas  
**EJECUTADO:** Ingrid Rocío Roberto Montaña

La parte ejecutante subsanó las deficiencias puestas en conocimiento en auto de diecisiete (17) de marzo de 2022 (008Auto202200317.pdf), dentro del término legal, tal y como se evidencia en el escrito presentado el 24 de marzo de 2022 (009Memorial.pdf), por tanto, resulta oportuno impartir el trámite procesal respectivo.

Diego Alejandro Solano Vargas, por conducto de apoderado judicial, solicitó que se libre mandamiento de pago contra Ingrid Rocío Roberto Montaña, por la suma de tres millones quinientos mil pesos (\$3.500.000), que corresponden a honorarios dejados de pagar por la ejecutada, junto con los intereses generados que reclama desde el 10 de abril de 2018, hasta cuando se verifique el pago y por las costas en el trámite de este proceso. Como soporte de esta reclamación aporta los siguientes documentos:

1. Copia de contrato de prestación de servicios como abogado, celebrado entre Diego Alejandro Solano Vargas e Ingrid Rocío Roberto Montaña el 10 de abril de 2018.
2. Copias del expediente del Proceso de Cesación de los Efectos Civiles de Matrimonio 1500131600012018-0014700, adelantado en el Juzgado Primero de Familia del Circuito Judicial de Tunja, entre las que se cuentan, como documentos relevantes:
  - Demanda radicada el 19 de abril de 2018 (págs. 22-51 del archivo: 007Memorial.pdf).
  - Auto admisorio de la demanda de 24 de mayo de 2018 (pág. 58 del archivo: 007Memorial.pdf).
  - Acta de audiencia de conciliación judicial celebrada el 30 de noviembre de 2018 (pág. 75 del archivo: 007Memorial.pdf).
  - Oficio de 10 de julio de 2018 emitido por la Alcaldía Mayor de Tunja en la que informa que se procede a inscribir el embargo sobre vehículo de propiedad del demandado (pág. 139 del archivo: 007Memorial.pdf).

Frente al proceso ejecutivo laboral el CPT en su artículo 100 señala que *“será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”*, con lo que admite una variada gama de títulos ejecutivos, entre los que podemos enunciar las actas de conciliación, los actos administrativos, las sentencias o decisiones judiciales notificadas y ejecutoriadas, entre otros, siempre que tengan origen en una relación de trabajo.

El CPT y de las SS, no regula el trámite del proceso ejecutivo por lo que por remisión normativa derivada del artículo 100 y 145 del CPT debe acudirse al dispuesto en la materia por el CGP.

De conformidad con el artículo 430 del CGP, el juez librará mandamiento de pago o ejecutivo, ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que el juez considere legal, cuando a la demanda **se acompañe un documento que preste mérito ejecutivo**. Ahora, frente a las características del título ejecutivo son las previstas en el artículo 422 del CGP que nos precisa que un título ejecutivo es un documento o conjunto de documentos que prueban la existencia de una obligación **clara, expresa y exigible en cabeza del deudor y a favor del demandante**.

En tal entendido el título ejecutivo debe acreditar la existencia de una obligación clara, expresa y exigible frente al ejecutado, **clara** porque los elementos de la obligación (sujeto activo, sujeto pasivo, vínculo jurídico y la prestación u objeto) están determinados o, por lo menos, pueden inferirse por la simple revisión del título; **expresa** en la medida que

debe estar especificada en documentos o documentos que imponen al obligado una conducta de dar, hacer o no hacer determinada; finalmente, la obligación debe ser **exigible** en la medida que debe cierto el tiempo en el cual debe ejecutarse o cumplirse la obligación, y que al momento de demandar su ejecución esta no esté sujeta al cumplimiento de un plazo o condición.

De la documental aportada, es posible establecer que las partes acordaron la celebración de un contrato de prestación de servicios en el que el accionante prestaría sus servicios como abogado, atendiendo al siguiente objeto: *“El abogado, de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará asesoría jurídica a El Cliente en los siguientes asuntos: 1. Inicie, tramite y lleve hasta su culminación proceso de Cesación de efectos civiles de matrimonio católico y liquidación de sociedad conyugal.” {sic}.*

Y que por esas labores se le reconocerían como honorarios lo correspondiente a cuatro millones de pesos (\$4.000.000) cancelados así: *“El 25% del valor con la firma del presente contrato; 25% del valor con la inscripción de medidas cautelares; el 25% con la audiencia de conciliación y el 25% del valor con la audiencia de fallo”.*

Frente a la ejecución de la labor encomendada, se encuentra que el abogado ejecutante, efectivamente, promovió la acción judicial en procura de la cesación de efectos civiles de matrimonio católico a favor del accionada, como se evidencia con las piezas procesales del expediente judicial en el que se tramitó el Proceso de Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio Católico de radicación 2018-00147 que cursó ante el Juzgado Primero de Familia de Tunja, y terminó pro conciliación, en el que el ejecutante actuó como apoderado especial de Ingrid Rocío Roberto Montaña.

Así las cosas, se tiene que el objeto contractual se cumplió por parte del accionante, lo que comporta causación de honorarios pactados por los extremos procesales en su totalidad, atendiendo a que se gestionó el proceso desde su inicio hasta su culminación por el apoderado demandante.

Sin embargo, la parte accionante reconoce el pago parcial realizado por la demandada, en valor de \$500.000, que acepta se le pagaron antes de iniciar el proceso judicial y, adicionalmente, se tiene que las parte acordaron el pago de esos honorarios de manera fraccionada, durante el trámite procesal, según se plasmó en la clausula segunda del contrato, en pagos de 25% del total de los honorarios pactados (esto es, un millón de pesos (\$1.000.000)), en cada oportunidad en las siguientes condiciones:

**Primer pago**, a la firma del contrato (10 de abril de 2018, según contrato anexo a la demanda).

**Segundo pago**, a la inscripción de las medidas cautelares (10 de julio de 2018, según oficio de la Alcaldía de Tunja, secretaría de Transito, que da cuanta de la inscripción de una de las decretadas).

**Tercer pago**, en audiencia de conciliación (30 de noviembre de 2018, según acta incorporada al expediente, referida previamente), donde termino el proceso y se haría exigible la suma restante para completar los honorarios, dado que allí terminó el proceso y el **Cuarto y último pago**, se habría pactado para la emisión del fallo que no tuvo lugar.

Así las cosas, en el mandamiento de pago se discriminarán las obligaciones por su fecha de causación, según lo expuesto previamente, y se imputara el pago reconocido a la primera cuota de los honorarios pactados.

Ahora bien, la parte ejecutante solicitó que se libre mandamiento de pago por *“intereses legales del 6% anual, generados desde el día diez (10) de abril de 2018 hasta el día cinco (05) de julio de 2018, suma que asciende a ochocientos mil pesos (\$800.000 m/cte.) a la fecha.”{sic}*, solicitud a la que no se accederá atendiendo a que en el contrato que sirve de título, no se pactó causación de intereses de ninguna naturaleza, por tanto, no hacen parte de la obligación derivada de la prestación de servicios, objeto de este trámite.

Finalmente, para efecto de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda se

dispondrá que las sumas sean reconocidas, debidamente, indexada entre la fecha en que se hicieron exigibles y la fecha en que se materialice su pago, atendiendo criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral desde sentencia SL359 de 3 de febrero de 2021, reiteración de posición asumida sentencias como las SL3821 de 2020, SL 3199 de 2017, entre otras, que impone su reconocimiento de manera oficiosa.

De otro lado, la parte ejecutante solicitó el embargo y retención de salarios devengados por la accionada, solicitud a la que no se accederá pues no se realiza con apego a las exigencias previstas en artículo 101 del CPT y de la SS.

En virtud de lo anterior, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Tunja

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO. -** Librar mandamiento de pago a favor de Diego Alejandro Solano Vargas y contra Ingrid Rocío Roberto Montaña, por:

1. La suma de **quinientos mil pesos (\$500.000)**, debidamente indexada entre la fecha de su causación (10 de abril de 2018) y la fecha en que se materialice su pago, por concepto de primer pago de honorarios derivados de contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre Diego Alejandro Solano Vargas y Ingrid Rocío Roberto Montaña, según lo expuesto en la parte motiva.
2. La suma de **un millón de pesos (\$1.000.000)**, debidamente indexada entre la fecha de su causación (10 de julio de 2018) y la fecha en que se materialice su pago, por concepto de segundo pago de honorarios derivados de contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre Diego Alejandro Solano Vargas y Ingrid Rocío Roberto Montaña, según lo expuesto en la parte motiva.
3. La suma de **dos millones de pesos (\$2.000.000)**, debidamente indexada entre la fecha de su causación (30 de noviembre de 2018) y la fecha en que se materialice su pago, por concepto de tercer y cuarto pago de honorarios derivados de contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre Diego Alejandro Solano Vargas y Ingrid Rocío Roberto Montaña, según lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO. -** Ordenar a **Ingrid Rocío Roberto Montaña**, que en el término de **CINCO (5) DÍAS** siguientes a la notificación de esta providencia, pague al ejecutante **Diego Alejandro Solano Vargas**, las obligaciones referidas en el ordinal Primero conforme a lo dispone el Artículo 431 del CGP.

**TERCERO. -** Sobre costas, de este trámite se resolverá en oportunidad.

**CUARTO. -** La parte ejecutada cuenta con el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia para proponer excepciones de mérito, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 442 del CGP.

**QUINTO. -** Negar el mandamiento de pago por concepto de *“intereses legales del 6% anual, generados desde el día diez (10) de abril de 2018 hasta el día cinco (05) de julio de 2018 (...)”* solicitado por la parte accionante, según lo expuesto en la parte motiva.

**SEXTO. -** Notificar personalmente la presente decisión a **Ingrid Rocío Roberto Montaña**, para el efecto la parte ejecutante deberá agotar, en lo pertinente, el trámite de citación de acuerdo con lo previsto en el artículo 291 del CGP.

O podrá, en atención a las disposiciones incorporadas a este procedimiento con el Decreto 806 de 4 de junio de 2020, *“por el cual se adoptan medidas para implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, (artículo 8) efectuar el envío de la providencia que se pretende notificar (admisión de la demanda)

como mensaje de datos a la dirección electrónica del demandado anexando copia de la demanda y de los anexos.

Para lo cual deberá cumplir con las exigencias del del inciso segundo del artículo 8 del Decreto 806 de 2020, en lo que toca con, afirmar bajo gravedad de juramento que la dirección electrónica o el sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informar de qué manera obtuvo la dirección electrónica a la que remite la providencia y el traslado, para comunicaciones correspondientes. Adicionalmente deberá acreditar acuse de recibo o acceso del destinatario al mensaje, conforme al condicionamiento de constitucionalidad derivado de la Sentencia C-420 de 24 de septiembre de 2020.

**SÉPTIMO. -** Negar las medidas cautelares solicitadas, según lo expuesto en la parte motiva.

**Notifíquese y cúmplase. -**



**CÉSAR NORBERTO ESCOBAR MENDIVELSO**  
**Juez**

 <b>JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE TUNJA</b>	
<b>Estado</b> <b>12</b>	<b>Fecha</b> <b>8 de abril de 2022</b>
 <b>SECRETARIO</b>	